

NOTA

Asunto: **Informe resumido de la sesión plenaria
– Bruselas, 7 y 8 de noviembre de 2002**¹

I. APERTURA DE LA SESIÓN

1. La coordinación de las políticas económicas

- a) Debate sobre el informe del Grupo VI, presidido por el Sr. Hänsch
(doc. CONV 357/02)

Al introducir el debate, el Presidente felicitó al Sr. Hänsch y a todos los miembros del Grupo por el informe que presentaban a la Convención. El Presidente recordó que el mandato del Grupo “Gobernanza económica” no era empresa fácil dado que cuando se habla de la gobernanza económica se llega muy rápidamente al propio contenido de las políticas. Indicó también que pese a que el Grupo había podido llegar a conclusiones sobre numerosos puntos, el informe planteaba aún muchas cuestiones que debería discutir la Convención.

¹ La transcripción literal de la sesión plenaria se encuentra en el sitio Internet siguiente:
<http://european-convention.eu.int>

El Presidente recordó el objetivo del debate, es decir, no debatir la orientación de la política económica que algunos querrían se desarrollara en la Unión, sino determinar un marco institucional que permita a la Unión llevar a cabo eficazmente una política, sin prejuzgar su orientación.

i) Informe del Grupo

El Sr. Hänsch presentó las conclusiones del informe del Grupo del modo siguiente:

Se llegó a un amplio consenso a favor del mantenimiento del reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros en materia de política económica y política monetaria: la competencia para la política monetaria en la zona euro corresponde a la Unión y se gestiona a través del Banco Central y la competencia en materia de política económica queda en manos de los Estados miembros.

En lo referente a la política monetaria, se llegó a un amplio consenso a favor de mantener la independencia del Banco Central respecto de las influencias políticas, y de mantener su estructura actual y su mandato, siendo su función prioritaria la estabilidad de los precios. Sin embargo, determinados miembros se pronunciaron por una mayor transparencia por parte del Banco Central y pidieron que se ampliara su mandato al crecimiento y al empleo.

En cuanto a cómo mejorar la coordinación de las políticas económicas, sociales, fiscales y de empleo, el Sr. Hänsch recordó los cuatro instrumentos existentes: las orientaciones generales de las políticas económicas (OGPE), el pacto de estabilidad y crecimiento, el método abierto de coordinación y la armonización fiscal.

Los miembros del Grupo llegaron a un claro acuerdo a favor de incrementar y mejorar la coordinación. No obstante, no hubo consenso en lo referente a la función que debería asumir la Comisión en el marco del refuerzo de esa coordinación. El ámbito de la fiscalidad resultó especialmente delicado. Pese a que la mayoría de miembros habría deseado que el Consejo legislara por mayoría cualificada en el marco del procedimiento de codecisión por lo que respecta a la fiscalidad indirecta, la imposición de las sociedades, la fiscalidad de la energía y del medio ambiente, otros miembros se opusieron a cualquier recurso a la mayoría cualificada en dicho ámbito.

El Grupo consideró que el Eurogrupo era un instrumento muy importante como foro informal de discusión entre Estados miembros de la zona euro y pidió que se mantuviera ese carácter informal. En lo que respecta a las decisiones formales relativas a la zona euro, un buen número de miembros del Grupo estimó que las debería adoptar el Consejo ECOFIN incluyendo sólo a los Estados miembros de la zona euro.

El Grupo se pronunció por que se mejorara la eficacia de la representación exterior del euro en los foros internacionales. Una parte del Grupo opinó que el Presidente del Eurogrupo debería seguir asumiéndola y otros pidieron que una cláusula de habilitación en el tratado otorgara dicha función a la Comisión, tal como se hace en el ámbito de la política comercial.

Las propuestas de nueva redacción de los artículos 2, 3 y 4 del TCE y 2 del TUE resultaron muy controvertidas. Se opusieron diferentes concepciones políticas. Algunos abogaron por que se hiciera referencia al pleno empleo, a la cohesión social y territorial y a la economía social de mercado. Otros insistieron en el crecimiento sostenible y la competitividad. El Sr. Hänsch pidió un debate del pleno sobre este punto, ya que quedaba fuera de las competencias del Grupo.

ii) Debate en el pleno/conclusiones

Durante el debate general que tuvo lugar a continuación se confirmó el consenso del Grupo en cuanto al mantenimiento del actual reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros en materia de política económica y de política monetaria, es decir:

- la competencia para la política monetaria en la zona euro corresponde a la Unión;
- la competencia relativa a la política económica queda a cargo de los Estados miembros.

Igualmente hubo consenso en cuanto a la necesidad de incluir los objetivos económicos y sociales en el nuevo tratado constitucional. El Presidente indicó que, a su debido tiempo, el Praesidium estudiaría, a la luz del debate, las posibles formulaciones para determinar objetivos que tengan en cuenta los aspectos tanto económicos como sociales; el Praesidium presentaría al pleno en enero o febrero sus ideas sobre el contenido de los artículos relativos a los valores y objetivos de la Unión, que se incluirían en los primeros títulos del tratado constitucional.

Muchos abogaron por una mayor coordinación de las políticas económicas nacionales, lo que para algunos significa incrementar el papel de la Comisión.

Se pudo llegar a un consenso sobre el hecho de que la Comisión pudiera dirigir una primera advertencia sobre el establecimiento de las orientaciones generales de las políticas económicas (OGPE) directamente al Estado miembro afectado. Asimismo algunos apoyaron la sugerencia de que el Consejo adopte sus decisiones basadas en una propuesta de la Comisión excluyendo de la votación al Estado miembro de que se trate.

En cuanto al Pacto de estabilidad, predominó la opinión de que debería mantenerse pero que constituía un «instrumento político» que no había de figurar en el Tratado. No obstante, el Presidente recordó su carácter esencial en materia de estabilidad presupuestaria y de coordinación de las políticas económicas.

Sobre el procedimiento relativo a los déficits excesivos, numerosos miembros solicitaron que la Comisión pudiera dirigir una primera advertencia al Estado miembro afectado por un déficit excesivo. Para las fases posteriores, varios miembros respaldaron la idea de que el Consejo adoptara sus decisiones por mayoría cualificada partiendo de una propuesta de la Comisión, también excluyendo al Estado miembro afectado. No obstante, algunos se pronunciaron en contra de esa idea: el Praesidium debe seguir reflexionando.

En cuanto a la fiscalidad, nadie puso en tela de juicio las competencias fiscales previstas en los artículos 93, 94 y 175 del Tratado. Sobre los propios procedimientos, un importante número de miembros solicitó cambios de procedimiento que permitieran progresar en el ámbito de la política fiscal con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del mercado único, incluyendo en el tratado constitucional una lista de medidas a las que se aplicaría la votación por mayoría cualificada en el Consejo.

Por el contrario, los miembros de la Convención que quieren que se mantenga la unanimidad en materia fiscal lo repitieron de forma clara. El Presidente dedujo de ello que dicha cuestión debería ser objeto de una propuesta posterior a la Convención.

En lo referente al método abierto de coordinación, se alzaron muchas voces a favor de su inclusión en el tratado, con disposiciones relativas a las funciones del Parlamento Europeo y de la Comisión. El Praesidium reflexionará sobre el modo de incluir el método abierto de coordinación en el tratado constitucional teniendo en cuenta las preocupaciones que se manifestaron, y a la luz del informe del Grupo presidido por el Sr. Amato, que presentará sus recomendaciones en la próxima sesión plenaria.

Muchos miembros resaltaron las dificultades que habrá de encarar el Eurogrupo tras la ampliación. No hay consenso a favor de la formalización del Eurogrupo. El Presidente indicó que el Praesidium reflexionaría al respecto. En lo referente a las decisiones propiamente dichas relativas a la zona euro, algunos pidieron que las adoptase el Consejo ECOFIN integrado únicamente por los Estados de la zona euro y otros abogaron por el recurso al método de cooperación reforzada.

Muchos defendieron un papel más relevante para los interlocutores sociales.

Pese a que el Grupo no propuso a este respecto ninguna solución concreta, se manifestó una clara orientación a favor de una representación única de la zona euro en el plano internacional, residiendo la dificultad en que un gran número de Estados miembros de la Unión no formarán parte de ella, al menos en el futuro próximo. Se formularon algunas sugerencias. El Presidente propuso que las examinara el Grupo VII presidido por el vicepresidente Dehaene y que incluyera en su informe esta cuestión.

b) Debate sobre la Europa Social
(doc. CONV 300/02 + COR 2 y doc. CONV 374/02)

El Presidente introdujo el debate recordando la petición presentada por varios miembros de la Convención, y apoyada por algunos otros, de que el pleno procediera a un debate sobre los problemas sociales. Éste era un problema importante al que los ciudadanos europeos concedían especial importancia. Puesto que la tarea de la Convención era abordar cuestiones de carácter estructural, el debate debía centrarse en las posibles modificaciones de las disposiciones actuales del Tratado.

Un gran número de miembros que intervinieron sobre este problema subrayó la importancia de abordarlo de manera suficientemente ambiciosa en el futuro tratado constitucional. No se comprendería que el tratado no incluyera ninguna referencia a las cuestiones sociales. El tratado debería prever la creación de un mercado social europeo; el mercado único no era un fin en sí.

Varios oradores mencionaron algunos de los elementos concretos a los que el tratado debería referirse. Éstos incluían los derechos sociales básicos, la protección social, el pleno empleo, la igualdad de sexos y la necesidad de proteger los servicios de interés general.

Varios oradores pidieron que se establecieran los instrumentos adecuados necesarios para llevar a la práctica los objetivos sociales de la Unión. Para algunos, ello implicaba una ampliación de las competencias existentes de la Unión en el ámbito social. Es importante que, por ejemplo, un planteamiento ambicioso sobre el empleo se sustente en disposiciones que permitan una

legislación adecuada en este ámbito. También se señaló que debían crearse instrumentos adecuados para fomentar la coordinación de las áreas de política social que seguían siendo responsabilidad de los Estados miembros. Eso implicaba para algunos que se introdujera en el tratado el método abierto de coordinación. Varios consideraron que el tratado debía reconocer la aplicación más amplia de la política social a través de la introducción de una cláusula horizontal. También se expresó la opinión de que la norma para todas las decisiones en el ámbito social debería ser la votación por mayoría cualificada.

Varios oradores subrayaron la importancia de dar un papel adecuado a los interlocutores sociales, y que esto debería reflejarse mejor en el nuevo tratado. Algunos hicieron también referencia al valor de realizar consultas más amplias a la sociedad civil.

La mayor parte de los oradores pidió que se creara un grupo de la Convención sobre cuestiones sociales.

Un orador consideró que la creación de un solo modelo social europeo no era posible. A su juicio, la política social es fundamentalmente una cuestión de Estados miembros individuales y así debe seguir; no debería pues haber ninguna ampliación de la competencia en este ámbito.

El Presidente concluyó diciendo que había una fuerte voluntad de que Europa fuera algo más que un mercado único, y de que ello se reflejara no sólo en los objetivos globales de la Unión, sino también en sus políticas. Estaba claro, sin embargo, que la UE también necesitaba mantener su competitividad respecto al resto del mundo. Ambos elementos se habían planteado en el Grupo “Gobernanza económica” y debían recogerse en el tratado constitucional.

Sobre la cuestión de las competencias hubo disparidad de opiniones, pero algunos pidieron que se ampliaran las competencias existentes, e incluso se sugirió que se incluyeran las cláusulas horizontales que hacen referencia a otros ámbitos de actuación. Hubo un apoyo significativo en pro de la concesión de un papel adecuado a los interlocutores sociales.

El Presidente observó que había un considerable apoyo para la creación de un grupo "Europa Social". Para ello se seguirían los procedimientos habituales, y en la preparación del mandato del Grupo se tendrían en cuenta los resultados del debate en el pleno.

- 2. Presentación por el Sr. Amato de la situación de los trabajos del Grupo IX sobre «Simplificación de Instrumentos y Procedimientos»**
- 3. Presentación por el Sr. Bruton de la situación de los trabajos del Grupo X sobre «Seguridad y Justicia»**

La Convención escuchó las presentaciones orales de los trabajos de cada uno de los dos Grupos, que presentarán sus informes en la próxima reunión (5 y 6 de diciembre).

Viernes 8 de noviembre

- 4. Continuación del debate preliminar sobre el anteproyecto de tratado constitucional (doc. CONV 369/02)**

Todas las intervenciones confirmaron el consenso al que se había llegado en la sesión precedente en lo referente al carácter constitucional del Tratado así como a su estructura.

También se hicieron comentarios más específicos:

- varios miembros destacaron que el objetivo de la Convención debería consistir en elaborar la totalidad del tratado, incluida la segunda parte, y, por consiguiente, transmitir a la CIG un producto completo;
- la Unión debería definirse no sólo como unión de Estados, sino también como unión de ciudadanos;

- algunos insistieron en el deseo de que se clarificara rápidamente la arquitectura institucional; debería reforzarse todo el triángulo institucional; para varios miembros, un nuevo régimen para la elección del presidente de la Comisión podría facilitar un acuerdo sobre un presidente electo del Consejo Europeo;
- en cuanto al Congreso de los Pueblos de Europa, se apuntó la idea de no preverlo entre las «Instituciones», lo que le conferiría un carácter que no se desea, sino de incluirlo en otra parte del tratado, como un foro destinado a aumentar la participación democrática en la vida europea;
- también se hicieron las siguientes sugerencias:
 - incluir las disposiciones sobre la competencia en el título «mercado interior»;
 - mencionar explícitamente la función de las regiones;
 - incluir en la primera parte del tratado el diálogo social;
 - destacar la exigencia de transparencia;
 - reforzar las disposiciones sobre buena administración;
- algunos miembros manifestaron reticencias en cuanto a un título específico «defensa».

Como conclusión, el Presidente observó que se había acogido favorablemente el proyecto de arquitectura y de articulación del Tratado, y que las demás cuestiones planteadas sobre el contenido o el lugar de una u otra disposición deberían volverse a examinar en el debate de los textos que el Praesidium presentaría a la Convención a partir del comienzo de 2003, elaborados a la luz de los debates en el pleno.

5. Las competencias complementarias

- Debate sobre el informe del Grupo V, presidido por el Sr. Christophersen (doc. CONV 375/02)

Antes de proceder a su presentación de las conclusiones del Grupo V (CONV 375/02), el Sr. Christophersen quiso aportar algunas aclaraciones sobre determinados comentarios que se le habían dirigido. Indicó en particular que el primer objetivo del Grupo era aclarar las responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Unión y que el Grupo no se había planteado en ningún momento ningún tipo de renacionalización de las políticas comunitarias. Tampoco quiso poner en tela de juicio los poderes legislativos del Parlamento Europeo. La nueva denominación propuesta por el Grupo, "medidas de apoyo", tampoco prejuzgaba la importancia de los ámbitos políticos en cuestión.

i) Informe del Grupo

En su intervención, el Sr. Christophersen insistió en los siguientes elementos del informe:

- Una de las recomendaciones fundamentales del Grupo era la de incluir en la primera parte del tratado un título específico y único dedicado a las competencias. Este título debería englobar una descripción sucinta de las competencias (cuestión que había suscitado algunas reservas en el Grupo), la definición de los tipos de competencias y los principios aplicables al ejercicio de las competencias de la Unión.
- En lo referente a la definición de las propias competencias complementarias, al concluir que "la legislación de la Unión (reglamentos y directivas) no podrá ser adoptada como medidas de apoyo", el Grupo no tenía intención de anticipar una definición de lo que debe corresponder al ámbito "legislativo" en la Unión, tarea que es competencia del Grupo presidido por el Sr. Amato, ni poner en tela de juicio la participación del Parlamento Europeo, por medio del procedimiento de codecisión, en la toma de decisiones en los ámbitos considerados.

Al utilizar la terminología del Tratado actual, el Grupo quería indicar que las medidas de apoyo abarcaban los ámbitos en los que los Estados miembros no han transferido a la Unión sus competencias legislativas y que, por tanto, la Unión sólo puede adoptar medidas en esos ámbitos para completar o apoyar la actuación de los Estados, medidas que en ningún caso pueden armonizar, sustituir, modificar o en definitiva afectar en forma alguna la legislación de los Estados miembros.

- El Grupo enumeró los principios que deberían regular el ejercicio de las competencias de la Unión. El Sr. Christophersen insistió en el equilibrio presente en dicha enumeración. Se trata de los principios de atribución de competencias, subsidiariedad, proporcionalidad, primacía del Derecho comunitario, aplicación y ejecución nacionales, solidaridad e interés común, así como de respeto de la identidad nacional.
- La formulación propuesta por el Grupo del principio de atribución de competencias (que dispone que las competencias que no hayan sido transferidas a la Unión siguen siendo competencias de los Estados miembros) y del principio de respeto de la identidad nacional (que incluye una lista de ejemplos) no tenía por finalidad modificar el alcance de dichos principios, sino sólo hacerlos más claros para los ciudadanos.
- En lo que respecta a las interferencias entre las competencias funcionales (por ejemplo, el mercado interior) y las competencias en ámbitos específicos, en particular los cubiertos por las medidas de apoyo, el Grupo propuso que se incluyeran en el tratado los principios consagrados por la jurisprudencia. El "centro de gravedad" (comprendido como "objetivos principales, contenido y efectos perseguidos") de una determinada propuesta debe guiar la elección de la base jurídica en el tratado.
- El artículo 308 debe mantenerse como "cláusula de salvaguardia". El Sr. Christophersen puso de relieve que los mecanismos para dificultar el recurso a dicha cláusula se contrarrestan con la propuesta de crear nuevas bases jurídicas específicas en los ámbitos que han sido objeto de recurso sistemático al artículo 308 y con la propuesta de ampliarlo, más allá del mercado interior, a todos los objetivos de la Unión.

ii) Debate y conclusiones

Durante el debate que tuvo lugar a continuación, un gran número de miembros no compartió el enfoque recogido en el informe del Grupo.

La nueva denominación propuesta de "medidas de apoyo" fue considerada confusa por muchos oradores, en la medida en que no indica que se trata de "ámbitos" en los que la Unión está facultada para actuar.

La propuesta del Grupo de volver a formular la expresión "una Unión cada vez más estrecha" (artículo 1 del TUE) para no dar la impresión de que la futura transferencia de competencias es una finalidad en sí de la Unión suscitó la oposición de varios miembros. Algunos observaron que el problema surgía a causa de una mala interpretación, ya que dicho artículo se refiere a la unión entre los pueblos y, por tanto, no tiene consecuencias para las competencias. En su respuesta, el Sr. Christophersen destacó que no debía verse en esa recomendación una tentativa de limitar el alcance político de dicho artículo. Por el contrario, pese a que no haya sido posible ponerse de acuerdo sobre una redacción alternativa, el Grupo examinó unas opciones de formulación que expresaban todas el mismo compromiso a favor de la unión de los pueblos europeos. Recordó que los grupos políticos europeos, en sus posiciones para la Convención, también habían sugerido modificaciones a dicho artículo.

Ningún participante puso en tela de juicio la recomendación de prever en el nuevo tratado constitucional un título específico para todas las cuestiones relativas a las competencias, incluida la definición de las categorías de competencias y los principios aplicables al ejercicio de las competencias de la Unión.

Por el contrario, numerosos miembros manifestaron su desacuerdo con la idea de incluir en el tratado constitucional una "delimitación fundamental de las competencias de la Unión", por considerar que se trataba de una tentativa de volver a poner en el orden del día el catálogo de competencias, que la Convención ya había descartado.

Una amplia mayoría se opuso a la prohibición, propuesta por el Grupo, de utilizar instrumentos legislativos en el marco de las competencias complementarias. En opinión de ciertos oradores, dicha prohibición de entrada podría poner en tela de juicio los poderes legislativos del Parlamento Europeo a tenor de la codecisión en los ámbitos considerados. Para buen número de miembros, debía descartarse la idea de establecer un vínculo entre tipo de competencias e instrumentos. No obstante, ningún participante cuestionó que la prohibición de armonizar las legislaciones nacionales fuera un elemento que caracterizaba casi todos los ámbitos considerados.

Numerosos miembros se opusieron a la inclusión de ámbitos tales como la política social o la investigación en la lista de ámbitos caracterizados en el informe como competencias complementarias.

La cláusula de respeto de la identidad nacional también fue objeto de reservas de muchos participantes. Varios oradores consideraron que se trataba de una tentativa de reintroducir la idea de una lista de competencias de los Estados miembros, idea que la Convención ya había descartado claramente, e indicaron preferir la redacción, más general, del artículo 6.3 del TUE. El Sr. Christophersen recordó que el Grupo había incluido en la versión final del informe, precediendo a la lista de ejemplos, los términos "entre otros" para resaltar claramente su carácter indicativo y no exhaustivo. La intención del Grupo era aclarar el principio, excluyendo cualquier veleidad de poder considerar la lista de ejemplos como un catálogo de competencias de los Estados.

En lo referente al artículo 308, se llegó a un amplio consenso sobre la necesidad de mantener una "cláusula de flexibilidad" con modalidades muy exigentes de toma de decisiones, en particular la deliberación del Consejo por unanimidad. En lo que respecta a los mecanismos de salvaguardia de la "cláusula de flexibilidad", los miembros se mostraron más críticos. Así, la ruptura del paralelismo de las formas, que lleva a permitir que se derogue por mayoría cualificada un acto adoptado por unanimidad, y el recurso prejudicial se enfrentaron a la oposición de muchos miembros. Como observó el propio Sr. Christophersen, se manifestó una neta preferencia por un control político ejercido a la vez por el Parlamento Europeo, cuyo dictamen conforme se exigiría para la adopción de una decisión, y por los parlamentos nacionales, por medio de un enlace con el sistema de alerta rápida propuesto por el Grupo "Subsidiariedad".

Para poner fin al debate, el Sr. Dehaene, Presidente de la sesión, indicó que el debate en el pleno había permitido comprobar que una amplia mayoría de miembros de la Convención no compartía el enfoque recogido en el informe, y que el Praesidium, a la luz de los distintos elementos puestos de manifiesto en el debate, seguiría su reflexión más adelante.

6. Turno de preguntas

No se abordó este punto del orden del día por falta de tiempo.

II. PRÓXIMA SESIÓN DE LA CONVENCIÓN

El Presidente anunció que la próxima reunión de la Convención se celebraría el jueves 5 de diciembre a partir de las 15.00 horas y el viernes 6 de diciembre a partir de las 9.30, y se dedicaría esencialmente a estudiar los informes de los Grupos "Simplificación de los procedimientos e instrumentos legislativos " y "Seguridad y Justicia".

CONVENCIÓN EUROPEA

Sesión plenaria de los días 7 y 8 de noviembre de 2002

LISTA DE ORADORES

por orden de intervención

Jueves 7 de noviembre

1. La coordinación de las políticas económicas

- a) Debate sobre el informe del Grupo VI "Gobernanza económica", presidido por el Sr. Hänsch
(doc. CONV 375/02)**

1. D. Caspar EINEM – Austria (Parlamento)
 2. D. Timothy KIRKHOPE – Parlamento Europeo
 3. D. Evrypidis STYLIANIDIS – Grecia (Parlamento)
 4. D. Pierre MOSCOVICI – Francia (Gobierno)
 5. D. Elmar BROK – Parlamento Europeo
 6. D.^a Danuta HÜBNER – Polonia (Gobierno)
 7. D. Andrew DUFF – Parlamento Europeo
 8. D. Michel BARNIER – Comisión
 9. D. Erwin TEUFEL – Alemania (Parlamento)
 10. D. Pierre LEQUILLER – Francia (Parlamento)
 11. D. Hans Martin BURY – Alemania (Gobierno)
 12. D. Gianfranco FINI – Italia (Gobierno)
 13. D. Josep BORRELL FONTELLES – España (Parlamento)
 14. D.^a Pervenche BERES – Parlamento Europeo
 15. D. Peter HAIN – Reino Unido (Gobierno)
 16. D. Johannes VOGGENHUBER – Parlamento Europeo
 17. D. Henrik dam KRISTENSEN – Dinamarca (Parlamento)
 18. D. Alfonso DASTIS – España (Gobierno)
 19. D.^a Marie NAGY – Bélgica (Parlamento)
- (Tarjetas azules: FARNLEITNER, FAYOT, de OLIVEIRA MARTINS)*
20. D.^a Lena HJELM-WALLEN – Suecia (Gobierno)
 21. D. Josef ZIELENIEC – Rep. Checa (Parlamento)
 22. D. Giorgos KATIFORIS – Grecia (Gobierno)

23. D. Valdo SPINI – Italia (Parlamento)
24. D. Ernani LOPES – Portugal (Gobierno)
25. D. William ABITBOL – Parlamento Europeo
26. D. Gijs de VRIES – Países Bajos (Gobierno)
27. D.^a Sylvia-Yvonne KAUFMANN – Parlamento Europeo
28. D. Adrian SEVERIN – Rumania (Parlamento)
29. D. Hubert HAENEL – Francia (Parlamento)
30. D. Göran LENNMARKER – Suecia (Parlamento)
31. D. Louis MICHEL – Bélgica (Gobierno)
32. D.^a Ayfer YILMAZ – Turquía (Parlamento)
33. D.^a Hildegard PUWAK – Rumania (Gobierno)
34. D. Lamberto DINI – Italia (Parlamento)
35. D. Jacques SANTER – Luxemburgo (Gobierno)
36. D.^a Linda McAVAN – Parlamento Europeo
37. D.^a Cristiana MUSCARDINI – Parlamento Europeo
(*Tarjeta azul: THORNING-SCHMIDT*)
38. D.^a Gisela STUART – Reino Unido (Parlamento)
39. D.^a Piia-Nora KAUPPI – Parlamento Europeo
40. D. Oguz DEMIRALP – Turquía (Gobierno)
41. D. Dick ROCHE – Irlanda (Gobierno)
42. D.^a Riitta Lisa KORHONEN – Finlandia (Parlamento)
43. D. Emilio GABAGLIO – (Confederación Europea de Sindicatos) Observador
44. D. Roger BRIESCH – (Comité Económico y Social) Observador
(*Tarjeta azul: HEATHCOAT-AMORY*)

Jueves 7 de noviembre

1. La coordinación de las políticas económicas

b) Debate sobre la Europa Social (doc. CONV 300/02 + COR 2 y doc. CONV 374/02)

1. D.^a Anne VAN LANCKER – Parlamento Europeo
2. D. Proinsias DE ROSSA – Irlanda (Parlamento)
3. D. Vytenis ANDRIUKAITIS – Lituania (Parlamento)
4. D. Ben FAYOT – Luxemburgo (Parlamento)
5. D. Jürgen MEYER – Alemania (Parlamento)
6. D.^a Eduarda AZEVEDO – Portugal (Parlamento)
7. D. Paraskevas AVGERINOS – Grecia (Parlamento)
8. D. Carlos CARNERO – Parlamento Europeo
9. D. Danny PIETERS – Bélgica (Parlamento)
10. D. Antonio TAJANI – Parlamento Europeo
11. D. Jan KOHOUT – Rep. Checa (Gobierno)
12. D. Frans TIMMERMANS – Países Bajos (Parlamento)
13. D. Per DALGAARD – Dinamarca (Parlamento)

3. Presentación por el Sr. Bruton de la situación de los trabajos del Grupo X «Seguridad y Justicia»

(Tarjetas azules: STUART, ROCHE, HAENEL)

CONVENCIÓN EUROPEA

Sesión plenaria de los días 7 y 8 de noviembre de 2002

LISTA DE ORADORES (revisada)

por orden de intervención

Viernes 8 de noviembre

– **Continuación del debate preliminar sobre el anteproyecto de tratado constitucional**

1. D. Sören LEKBERG – Suecia (Parlamento)
2. D. Antonio TAJANI – Parlamento Europeo
3. D. Henning CHRISTOPHERSEN – Dinamarca (Gobierno)
4. D. Pierre LEQUILLER – Francia (Parlamento)
5. D. Joschka FISCHER – Alemania (Gobierno)
6. D. Olivier DUHAMEL – Parlamento Europeo
7. D. Alberto COSTA – Portugal (Parlamento)
8. D. Kimmo KILJUNEN – Finlandia (Parlamento)
9. D. Hannes FARNLEITNER – Austria (Gobierno)
10. D. Johannes VOGGENHUBER – Parlamento Europeo
11. D. Jürgen MEYER – Alemania (Parlamento)
12. D. Jacob SÖDERMAN – (Defensor del Pueblo Europeo) Observador
13. D. Reinhard RACK – Parlamento Europeo
14. D. Pierre CHEVALIER – Bélgica (Gobierno)
15. D.^a Liia HÄNNI – Estonia (Parlamento)
16. D. Jos CHABERT – (Comité de las Regiones) Observador

5. Las competencias complementarias
Debate sobre el informe del Grupo V presidido por el Sr. Christophersen
(doc. CONV 375/02)

1. D. Pierre LEQUILLER – Francia (Parlamento)
2. D. Alfonso DASTIS – España (Gobierno)
3. D. Lamberto DINI – Italia (Parlamento)
4. D. Joschka FISCHER – Alemania (Gobierno)
5. D. Erwin TEUFEL – Alemania (Parlamento)
6. D. David HEATHCOAT-AMORY – Reino Unido (Parlamento)

7. D. Andrew DUFF – Parlamento Europeo
 8. D. Alain LAMASSOURE – Parlamento Europeo
 9. D. Michael FRENDON – Malta (Parlamento)
 10. D. Pierre MOSCOVICI – Francia (Gobierno)
 11. D.^a Helle THORNING-SCHMIDT – Parlamento Europeo
 12. D. Diego LOPEZ GARRIDO – España (Parlamento)
 13. D. Gijs de VRIES – Países Bajos (Gobierno)
 14. D. Hannes FARNLEITNER Austria (Gobierno)
 15. D. Klaus HÄNSCH – Parlamento Europeo
 16. D. Rene van der LINDEN – Países Bajos (Parlamento)
 17. D. Michael ATTALIDES – Chipre (Gobierno)
 18. D. Olivier DUHAMEL – Parlamento Europeo
 19. D.^a Pervenche BERES – Parlamento Europeo
 20. D. Pierre CHEVALIER – Bélgica (Gobierno)
 21. D. António VITORINO – Comisión
 22. D. Ernani LOPES – Portugal (Gobierno)
 23. D. Jens-Peter BONDE – Parlamento Europeo
 24. D.^a Lena HJELM WALLEN – Suecia (Gobierno)
 25. D. Edmund WITTBRODT – Polonia (Parlamento)
 26. D.^a Liia HÄNNI – Estonia (Parlamento)
- (Tarjeta azul: TOMLINSON)*
27. D. Francesco SPERONI – Italia (Gobierno)
 28. D.^a Marie NAGY – Bélgica (Parlamento)
 29. D. Peter SERRACINO-INGLOTT – Malta (Gobierno)
 30. D. Joachim WUERMELING – Parlamento Europeo
- (Tarjetas azules: TIILIKAINEN, MacCORMICK, VANHANEN)*
-